

San Miguel, seis de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos antecedentes, RIT O-200-2023, caratulados “Olivares con I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda” sobre reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones seguido ante el Juzgado del Trabajo de San Miguel, por sentencia definitiva de quince de septiembre de dos mil veintitrés, se acogió la demanda interpuesta por la demandante por la que se declaró que el despido fue injustificado condenando a la demandada a pagar a la actora las siguientes cantidades: a.- \$700.000.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo. b.- \$4.200.000.- de indemnización por años de Servicio (6 años). c.- \$406.389.- por concepto de feriado legal proporcional, con los reajustes e intereses establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, más las costas de la causa que se regularon en \$ 1.000.000.

En contra el aludido fallo, Marco Zepeda Risso, abogado, por la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, interpone recurso de nulidad esgrimiendo la causal principal contemplada en el artículo 477 en relación con lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la ley 18.883; artículo 4° de la Ley 18.695, Decreto N°854 de 2004 del Ministerio de Hacienda, subtítulo 21, gastos en personal, ÍTEM 04, asignación 004 “Prestaciones de servicios en programas comunitarios” y artículo 76 de la Ley 21.526. En subsidio invoca la causal prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en cuanto la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, del código antes citado. Pide se invalide la sentencia y se dicte una de remplazo, que proceda a rechazar la demanda de autos en todas sus partes, con costas.

Por resolución de tres de noviembre del año pasado, la Sala Tramitadora de esta Corte declaró admisible el aludido recurso y en la audiencia de uno de febrero en curso comparecieron a estrados los abogados de la recurrente y de la recurrida.

CON LO OÍDO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la recurrente invoca como causal principal de abrogación la del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Luego de referirse a los antecedentes del proceso, sostiene que los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PXXNXLNEXXQ

entes edilicios al regirse por la ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no tienen más atribuciones que las conferidas por las leyes, en concordancia con el principio de legalidad enunciados en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y artículo 2° de Ley Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, impidiendo esta última a los municipios la contratación de personal bajo normas del Código del Trabajo fuera de los casos específicamente señalados por ley, tal como ocurre en las situaciones específicas contempladas en el artículo 3° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales contenido en la ley N°18.883.

En seguida, el recurso transcribe el fundamento tercero y reprocha que la sentencia, pese a reconocer la imputación presupuestaria a la cual se refiere el programa por medio del cual se encuentra contratada la prestadora de servicios, concluye que no se cumplen los requisitos del artículo 4° de la Ley 18.883.

Aduce que lo razonado erróneamente por el juez, se puede contrastar con lo dispuesto en la Ley N° 21.526 que otorga “Reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales”, específicamente en su artículo 76 prescribe *“Para efectos del artículo 4 de la ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, se tendrán como cometidos específicos los servicios que se presten por las personas contratadas en programas comunitarios con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, del decreto N°854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias; o en actividades o programas financiados con cargo a recursos transferidos a la municipalidad por otro organismo, público o privado, o en programas o actividades específicos del sector de salud municipal.”* Denuncia que, en la especie, se configura una falta de congruencia entre lo razonado y el primer acápite del considerando tercero, que reconoce expresamente la existencia de una relación laboral, por lo que a su entender no podría el sentenciador arribar a la convicción de estar en presencia de una relación laboral y mucho menos establecer un vínculo contractual de otra naturaleza, que la civil o administrativa entre las partes. Los programas municipales que dieron origen a la contratación de la actora,



precisamente se financian -tal como señaló el sentenciador- en el ítem presupuestario 215-21-04-004-000-000.

Concluye que la relación habida entre las partes se desarrolló dentro del marco legal de la Ley N° 18.695 y el Decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, el que autoriza a las municipalidades para contratar personal en condiciones y contexto similar al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil, específicamente señalando en los decretos de contratación que los honorarios deben pagarse del ítem presupuestario 15-21-04-004-000-000.

A continuación acusa que el juez erróneamente estableció que las funciones no eran propias del ámbito de una profesión o técnica de educación superior ni tampoco exigían expertiz, en circunstancias que las funciones que cumplió la demandante son aquellas determinadas en los Programas Municipales creados por la necesidad de la comunidad local, que la ley N°18695 encarga a los entes edilicios sin necesariamente caer en una función de carácter permanente, los programas municipales para los cuales prestó servicios se modificaban año a año en cuanto a sus funciones y objetivos por lo que la experticia que ésta tenía “egresada de trabajo social” si cumplía con los requisitos que el programa exigía.

Finalmente se refiere a la condena en costas personales determinadas por el sentenciador en la cantidad de \$1.000.000, la que considera contraria a la forma de contratación que la ley exige a las municipalidades. Asevera, que el actuar del municipio no es temerario sino que existen fundamentos claros que demuestran la existencia de “motivos plausibles para litigar” por lo que no es posible determinar tal sanción, toda vez que el régimen estatutario determina su contratación y la ley impide un aplicación supletoria del Código del Trabajo, en ese sentido y en el contexto en el cual se encuentra inmersa la contratación de la actora basada en el principio de legalidad, que obliga a la administración a actuar dentro de lo que expresamente le ha sido permitido, como también por las reglas hermenéutica el Código Civil.

Termina solicitando se anule la sentencia y dicte una de reemplazo que rechaza en todas sus partes la demanda.

Segundo: Que el artículo 477 del Código del Trabajo contempla dos causales “genéricas” de nulidad, distintas la una de la otra. En su primera parte establece la causal de infracción sustancial de derechos o garantías



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PXXNXLNEXXQ

constitucionales - derechos o garantías que tienen que ser debidamente identificados por el recurrente -, precisándose en la norma legal que dicha vulneración puede producirse en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva; y, en su segunda parte, consulta otra causal, la de infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo (de norma “decisoria litis”), habiéndose deducido en la especie la de la segunda parte de la norma.

Tercero: Que la causal invocada por la recurrente, supone necesariamente la aceptación de los hechos que ha dado por establecidos el Tribunal, sin que ellos puedan ser modificados o alterados a través de este arbitrio.

Es así como el tribunal estableció en carácter de inamovibles los hechos que siguen (considerando tercero de la sentencia censurada):

1.- La actora prestó servicios como encargada territorial del programa Juntos Tejiendo redes en el territorio, durante el 2017, luego monitorea social en el programa Fortaleciendo los Procesos de participación ciudadana, durante el 2018; Juntos Tejiendo redes en el territorio, durante el 2019; y a contar del 4 de abril de 2019 se le agrega en su contrato labores administrativas, programas que dependían de la DIDECO (dirección de desarrollo comunal) y se cargan a una partida del presupuesto 215-21-04-004-000-000, correspondiente a “prestaciones de servicios comunitarios”.

2.- Durante el año 2021 dichas labores las prestó en el programa “Gestión comunitaria: participación e identidad local”. El 3 de febrero de 2021 se instruyó pagar sin suscripción de contrato, como apoyo administrativo del “Programa Identidad Territorial y Participación ciudadana” y luego en las mismas funciones en el “Programa soporte para dirigentes y Líderes comunales” conforme al contrato de 26 de octubre de 2021.

3.- Durante el año 2022, prestó labores de apoyo de atención de público, en el “Programa Participación Comunitaria y Territorial” vigente desde 3 de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año.

4.- Las labores que debía realizar la actora no eran propias del ámbito de una profesión o técnica de educación superior ni tampoco exigían expertiz.

5.- No se acreditó el cumplimiento del primer requisito del artículo 4° de la Ley 18.883.



6.-Las labores encomendadas no son específicas sino genéricas.

7.- En el último contrato se requirió de la demandante servicios de apoyo de atención de público, labores que son habituales de la Municipalidad, ya que como servicio público debe recibir y oír las solicitudes de los ciudadanos, servicios que fueron efectivamente prestados.

Concluye el sentenciador que los servicios prestados por la actora al municipio lo fueron bajo subordinación y dependencia.

Cuarto: Que desde ya se avizora que el recurso adolece de defectos en su formalización.

En primer término en lo relativo a la falta de congruencia en que incurriría la sentencia al reconocer, por una parte, que los programas municipales que dieron origen a la contratación de la actora, se financian en el ítem presupuestario 215-21-04-004-000-000 y luego al concluir que el vínculo que unió a las partes concernidas era uno de naturaleza laboral, regido por el Código del Trabajo, dicho fundamento, no se aviene con la causal invocada, por cuanto acontece que para ese fin el Código del Trabajo contempla una causal de nulidad específica, que no es que se esgrime en el recurso.

En todo caso, de la lectura del recurso se observa que lo que se reprocha es la disconformidad con los razonamientos vertidos en el fallo; todos motivos suficientes para desestimar el recurso en lo que hace a esta causal.

Quinto: Que, en seguida, conforme los hechos asentados por el Tribunal en la sentencia reprochada, se advierte que las alegaciones efectuadas por la actora para fundar la causal en estudio no guardan concordancia con los hechos que han quedado asentados en el fallo, resultando estos como ya se dijo inamovibles, de modo que sus planteamientos en este aspecto no es posible resolverlos con arreglo a la causal invocada.

En efecto, los reproches que hace el recurrente, chocan con la situación fáctica establecida por el fallo –y que dice relación con la circunstancia de haberse asentado que las labores realizadas por la demandante, no eran específicas sino propias y generales de un municipio, además de realizar la actora labores que no eran propias del ámbito de una profesión o técnica de educación superior ni tampoco exigían expertiz - de lo que se desprende que, dados los hechos establecidos, la sentenciadora no



cometió error de derecho; por el contrario, aplicó correctamente la norma que subsume a aquéllos en el artículo 4 de la Ley 18.883.

Sexto: Que finalmente, en cuanto se denuncia una improcedente condena en costas, dicha alegación no se vincula con ninguna norma infringida, correspondiéndose además con un arbitrio distinto al de nulidad, como lo es el recurso de apelación.

De esta forma se impone el rechazo del recurso en lo que hace a este capítulo.

Séptimo: Que como se adelantó en el exordio de este fallo, en subsidio de la causal anterior, el recurso se asila en aquella contemplada en el artículo 478, letra e) del Código del Trabajo en relación con lo previsto en el numeral 4° del artículo 459 del aludido estatuto legal, esto es, al haberse dictado sentencia con omisión del análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

Asevera el recurrente que su parte incorporó la siguiente prueba: [1] decreto N°435 de fecha 17 de enero de 2017 que aprueba el programa “Junto tejiendo redes en el territorio”; [2] Decreto N°1501 de 31 de enero de 2018 que aprueba el programa “Fortaleciendo los procesos de participación comunitaria”; [3] Decreto N°1946 de 4 de febrero de 2019 que aprueba el programa “Junto tejiendo redes en el territorio”; decreto N°368 de 9 de enero de 2020 que aprueba el programa “Gestión Comunitaria: Participación e identidad Local”; [4] Decreto N°311 de 12 de enero de 2021 que aprueba el programa “Soporte para dirigentes y líderes comunales”; [5] Decreto N°885 de 20 enero de 2022 que aprueba el programa “Participación comunitaria y territorial” y [6] los distintos informe de actividades presentados (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), por la actora que describen los tipos de actividades y gestión realizadas, que eran en concordancia con los objetivos y metas establecidos en los respectivos programas antes señalados.

Afirma que la sentencia se limita a tener por acreditado lo alegado por el actor en cuanto a que sus laboras eran genéricas y que carecía de expertiz, meramente por los dichos de testigos que carecían de imparcialidad, al habérseles puesto término a sus contratas.

Termina señalando que si el sentenciador se hubiese dado el trabajo de estudiar detalladamente la prueba documental y testimonial, podría haber



llegado a la convicción, de que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos en lo referido a la contratación a honorarios, pues existen distintos programas elaborados, con metas y objetivos propios, con distintas contrataciones a honorarios con la demandante, en razón de su expertiz (estudios y experiencia laboral) con el trabajo social, sin un control directo, tal como corroboran los informes de actividades presentados por la actora, cuyo objeto tenía verificar el cumplimiento de los presupuestos del programa para cursar su correspondiente honorario.

Octavo: Que el recurrente acusa una omisión en el análisis de la prueba rendida; sin embargo, es posible advertir que ello no resulta efectivo, puesto que el sentenciador en el basamento sexto de la sentencia desestima la prueba que el recurrente entiende debió ser considerada, analizándola y señalando expresamente que *“si bien los documentos de la demandada dan cuenta de la relación contractual en apariencia se sujetaba a un vínculo de honorarios civil, cierto es, que conforme ya se razonó en el considerando 3º, dicha relación al no cumplir con el artículo 4 de la Ley 18883 y presentar elementos de subordinación y dependencia debe entenderse como laboral, conforme ha razonado la Excelentísima Corte Suprema en unificaciones de Jurisprudencia.”*

Queda claro entonces, que no es que el sentenciador no las haya analizado, sino que por el contrario las pondera en los términos que en dicho motivo se refiere, para luego extraer las conclusiones de las que el recurrente discrepa, lo cual guarda relación con la valoración, mas no con una ausencia de análisis de la misma.

Noveno: Con todo, ha de señalarse, que la causal invocada -478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo- tiene que ver con la omisión de un requisito formal, vale decir, con un reproche de procedimiento, estructural y no de contenido, por lo que el recurso de nulidad por esta causal ha de ser desestimada.

Décimo: Que lo razonado precedentemente llevará a esta Corte a rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo prevenido en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, se declara que **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Marco Zepeda



Risso, en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia de quince de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el Juzgado del Trabajo de San Miguel, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra Claudia Lazen M.

N°654-2023.-

Pronunciado por la **Cuarta Sala** de esta Corte, integrada por las ministras señoras María Alejandra Pizarro Soto, Claudia Lazen Manzur y el abogado integrante señor Jonatan Valenzuela Saldías. No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa no firman la ministra Alejandra Pizarro y el abogado integrante Jonatan Valenzuela por encontrarse ausentes.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PXXNXLNEXXQ

Proveído por la Presidenta de la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel.

En San Miguel, a seis de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PXXNXLNEXXQ